



El Secretario General subraya la voluntad de las Naciones Unidas para seguir acompañando a las autoridades y al pueblo de Colombia en sus esfuerzos por una paz y una seguridad duraderas en un momento crucial para el país

Bogotá, 14 de julio de 2026. En su más reciente informe sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, que abarca el período comprendido entre el 27 de marzo y el 26 de junio de 2026, el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, destacó el compromiso democrático del pueblo colombiano, la resiliencia de sus instituciones y los niveles de participación históricos en las pasadas elecciones, que culminaron el 21 de junio con la victoria de Abelardo De La Espriella, quien tomará posesión el próximo 7 de agosto.

El Secretario General subrayó que “una transición fluida y cooperativa entre los gobiernos contribuiría a preservar los avances que Colombia ha logrado en el marco del Acuerdo de Paz y a sentar las bases para hacer frente a los desafíos actuales”. El Secretario General señaló que “la transición hacia un nuevo Gobierno se está llevando a cabo en un momento crítico para el proceso de paz” y reiteró “la disposición de las Naciones Unidas para seguir acompañando a las autoridades y al pueblo de Colombia en sus esfuerzos por alcanzar una paz y una seguridad duraderas”. Indicó que su Representante Especial en Colombia, Miroslav Jenča, trabajará con las nuevas autoridades para conocer sus puntos de vista y prioridades y para ofrecer la experiencia y las capacidades de la Misión, que se basan en casi diez años de asistencia prestada durante distintos Gobiernos”.

De igual manera, António Guterres resaltó que los asuntos relacionados con la paz y la seguridad volvieron a situarse entre las principales preocupaciones de la población colombiana, como evidenciado durante la reciente campaña electoral. Frente a ello, reiteró que una implementación más completa de las disposiciones del Acuerdo Final de Paz sobre reincorporación, garantías de seguridad y reforma rural puede contribuir a ello de manera fundamental: “las zonas donde la violencia es más aguda son precisamente aquellas en las que la implementación ha sido insuficiente. Las políticas de seguridad y las iniciativas de paz pueden reforzarse mutuamente de forma armoniosa”, agregó.

El informe reporta avances graduales, aunque desiguales, en la implementación del Acuerdo de Paz, y señala la necesidad de superar retos estructurales persistentes y realizar esfuerzos sostenidos para reforzar la presencia institucional, mejorar la coordinación entre sectores y garantizar que la implementación de las medidas del Acuerdo se traduzca en mejoras tangibles para las personas de las comunidades más afectadas por el conflicto.

Por una reincorporación sostenible

En materia de reincorporación se destacó que es fundamental reforzar el apoyo a este proceso mediante la provisión de garantías de seguridad y oportunidades socioeconómicas sostenibles, de manera que los más de 11 mil excombatientes que ya llevan una década inmersos en esta transición, puedan asumir plenamente su papel como ciudadanos. El informe resalta que la reincorporación eficaz fomenta la confianza entre comunidades e instituciones, fundamental para reforzar la cohesión social, la reducción de la estigmatización y a mitigar las posibilidades de reclutamiento por grupos armados, lo que contribuye a su vez a prevenir el resurgimiento de la violencia.

Reforma Rural Integral, clave para un campo próspero y productivo

Respecto a la Reforma Rural Integral, y con avances importantes en materia de formalización y entrega de tierras, así como una reducción significativa de la pobreza multidimensional rural del 38,66% en 2018 a 22,4% en 2025, se resalta su papel fundamental para lograr la paz y la seguridad en las zonas rurales. Sin embargo, el Secretario General enfatizó que para estabilizar los territorios es urgente garantizar la seguridad de los beneficiarios. “Si bien los avances logrados hasta la fecha demuestran, su potencial transformador, su aplicación ha sido desigual. Impulsar la reforma será esencial para estabilizar las regiones afectadas por el conflicto, combatir las actividades ilícitas y mejorar las condiciones de vida de las comunidades rurales, añadió Guterres.

El desafío de las garantías de seguridad

El informe señala con preocupación que desde la firma del Acuerdo de Paz han sido asesinados 493 excombatientes, entre ellos 12 mujeres, 64 indígenas y 59 afrocolombianos. Si bien el número de ataques mortales ha disminuido en lo que va de 2026, con cinco asesinatos registrados hasta la fecha, uno de ellos durante el período que abarca el informe, persistieron otras formas de violencia, como las amenazas, la presión ejercida por grupos armados para que se unieran a sus filas, la extorsión dirigida contra sus proyectos productivos y los desplazamientos forzados. El informe destaca que la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General ha dictado, desde la firma del Acuerdo, 1.552 órdenes de captura, ha realizado 627 detenciones y ha obtenido 109 condenas relacionadas con ataques contra excombatientes.

Entre el 27 de marzo y el 1 de junio de 2026, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) reportó la afectación de 5.272 personas desplazadas forzosamente y 9.553 confinadas, en emergencias humanitarias en 7 departamentos. 58 % pertenecían a comunidades étnicas. De igual manera, al menos 316.000 personas sufrieron restricciones de circulación y acceso en el departamento del Cauca y en la Amazonía por el control ejercido por grupos armados.

En el mismo periodo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU Derechos Humanos) recibió denuncias de 33 asesinatos de líderes sociales, entre ellos 7 mujeres, 3 indígenas, 4 afrodescendientes y 4 campesinos, con especial afectación a autoridades étnicas, líderes involucrados en cuestiones relacionadas con la tierra, mujeres y miembros de Juntas de Acción Comunal. Pese a esta situación, los marcos normativos de prevención y protección derivados del Acuerdo de Paz, como la política pública de garantías para líderes y defensores de derechos humanos, aún no han sido aprobados ni implementados.

Por una paz duradera

El Secretario General recordó que una paz duradera exige de los colombianos un trabajo conjunto que supere las divisiones políticas tras el periodo electoral tenso y polarizador. “No hay lugar para la violencia política, y espero que los líderes de todas las partes se esfuercen por desescalar la retórica confrontacional y mantener canales constructivos de diálogo”, afirmó.

Finalmente, el Secretario General animó al Consejo de Seguridad y a la comunidad internacional a mantener su apoyo decidido a Colombia, y reafirmó que la Misión de Verificación “sigue plenamente comprometida con el avance de la paz y se encuentra en una posición idónea para seguir contribuyendo a estos esfuerzos, junto con el equipo de las Naciones Unidas en el país y la comunidad internacional en general”.

El informe será presentado en Nueva York el 15 de julio de 2026 por el señor Miroslav Jenča, Representante Especial del Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia.
